

## Encuentro de Trabajadores y Trabajadoras del Sector de Residuos de América Latina - ISP<sup>1</sup>

Bogotá, 27 y 28 de julio de 2017

### Síntesis de experiencias en América Latina

El presente informe presenta una síntesis de las experiencias compartidas en el Primer Encuentro de Trabajadores y Trabajadoras del Sector de Residuos de la ISP de América Latina, América Central y México, realizado en Bogotá, Colombia, el 27 y 28 de julio de 2017<sup>2</sup>.

El Encuentro formó parte del Plan de Trabajo 2016-2018 del Sector de Gobiernos Locales y Regionales / Municipal –GLR/Municipal- de la ISP.

Entre sus objetivos, se propuso compartir experiencias de sindicatos del sector de residuos y limpieza urbana de distintas ciudades de la región a fin de identificar prioridades y desafíos, prácticas exitosas e iniciativas relevantes en relación a condiciones laborales, gestión integral de residuos, inclusión de trabajadores informales, municipalización de servicios, etc.

Participaron en la reunión más de 40 representantes sindicales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua y Paraguay, representando a su vez una variedad de situaciones en lo que hace a los diferentes sistemas de gestión de residuos.

### Contenidos:

Asunción, Paraguay .....	2
Bogotá, Colombia.....	3
Brasilia - DF, Brasil .....	4
Buenaventura, Colombia.....	5
Ciudad de México, México .....	6
Chile.....	7
Esquel-Trevelin, Argentina .....	8
Guatemala, Empresa Municipal de Agua .....	9
La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia .....	10
Managua, Nicaragua.....	11
Medellín, Colombia .....	12
Quito, Ecuador .....	13

<sup>1</sup> Nota: a los fines de facilitar la lectura, se utilizará en adelante de manera genérica el masculino entendiendo que, salvo que se especifique, nos estaremos refiriendo tanto a mujeres como a hombres.

<sup>2</sup> <http://world-psi.org/es/primer-encuentro-de-trabajadoras-y-trabajadores-del-sector-de-residuos-de-america-latina>

## Asunción, Paraguay<sup>3</sup>

La capital del Paraguay concentra 600.000 habitantes que generan más de 700 toneladas diarias de residuos. La recolección es de gestión municipal –92% de cobertura-, y la disposición final está bajo gestión de la empresa privada EMPO S.A.

A pesar de que existe normativa nacional y municipal para la gestión integral de residuos sólidos, ésta aún no se ha implementado. Excepto algunos barrios donde se realiza recolección selectiva, los residuos se transportan sin ningún procesamiento al Relleno Sanitario “La Cateura”. Existen, además, decenas de vertederos clandestinos, un desafío que la ciudad aún no consigue resolver.

Luego de conflictos y problemas técnicos el relleno deberá cerrar en 2018. La empresa construye un nuevo relleno en una localidad vecina, pero hay incertidumbre por la negativa de ese otro municipio a que se instale allí. Se generó también un conflicto con los recuperadores de materiales reciclables que segregan en La Cateura, quienes demandan la construcción de una planta de procesamiento e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos previsto en la ordenanza municipal de 2014.

Los vecinos pagan directamente al municipio por boleta específica, y EMPO cobra por las toneladas de residuos que ingresan al relleno. Lo recaudado tiene un peso muy alto en los ingresos municipales, que equivale a casi la totalidad de su masa salarial.

La limpieza urbana y recolección la realizan casi 2 mil trabajadores municipales (20% de la planta municipal). Más de 60% son “jornaleros”, trabajadores permanentes que cobran por jornal. En los últimos años el **Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Asunción (SINOEMA)** logró importantes conquistas para equiparar las condiciones de los jornaleros con las de los demás trabajadores, así como el pase a planta de 700 trabajadores que tenían contratos precarios. Si bien la gestión de La Cateura es privada, el SINOEMA logró algunas mejoras en la seguridad del lugar.

Aunque hay temas pendientes, en general las condiciones laborales y los salarios de los trabajadores municipales de Asunción son mejores a las del resto del país. También la sindicalización de trabajadores municipales de Asunción es relativamente alta respecto de otras ciudades. El SINOEMA señala la necesidad de avanzar hacia una organización de alcance nacional que permita ampliar la lucha a todo el país.

En Asunción hay más de 2.000 “carriteros” que recogen residuos en las calles, y unos 800 “gancheros” trabajan en el relleno. El SINOEMA no afilia trabajadores informales, pero es solidario con sus reclamos: por ejemplo, los trabajadores municipales se comprometen a no recuperar materiales, y se ha defendido activamente el derecho de los recuperadores a trabajar en el relleno cuando se concesionó el servicio a EMPO.

La remunicipalización del servicio de aseo en 2003 fue una importante conquista de los trabajadores y para lo que fue fundamental contar con el apoyo de la ciudadanía. Los sindicatos realizaron fuertes campañas de sensibilización enfocadas sobre la calidad y el costo del servicio. Hubo también un enorme esfuerzo personal de los trabajadores de recolección, que asumieron la tarea con una flota reducida de vehículos sabiendo que la única forma de recuperar la gestión pública era demostrar su capacidad de brindar un servicio de calidad. La lucha contra la privatización es permanente y vigente hasta el día de hoy.

---

<sup>3</sup> Intervención de Julio Fernández, Presidente del sector de recolección, SINOEMA, complementada con entrevista e informaciones brindadas con posterioridad al Encuentro.

## Bogotá, Colombia<sup>4</sup>

Con una población aproximada de 8 millones, la ciudad de Bogotá genera unas 8.000 toneladas diarias de residuos sólidos. La cobertura de recolección alcanza el 100% de la población y es gestionada por empresas privadas y la municipal Aguas de Bogotá. La disposición final en el relleno sanitario de Doña Juana está tercerizada con la empresa “Centro de Gerenciamiento de Residuos –CGR– Doña Juana S.A E.S.P”.

Entre 2012 y 2015 se implementó el ambicioso programa “Basura Cero”. La importante transformación que implicó este programa estaba marcada por dos hechos significativos: la situación de agotamiento del relleno sanitario, y los Autos de la Corte Constitucional de Colombia (CCC) que obligaron al reconocimiento de las personas recicladoras como parte integral del sistema, y a remunerar su trabajo.

El Programa “Basura Cero” avanzaba, además, sobre la municipalización del sistema de recolección. Lo que generó la reacción de las empresas concesionarias que paralizaron el servicio por tres días, lo que le valió sanciones al ex-alcalde bajo el argumento de haber actuado irresponsablemente y provocado un riesgo para la salud pública. Cabe señalar que en apenas un año los cambios en el sistema habían logrado reducir la cantidad de residuos que llegaron al relleno, había bajado el gasto municipal en la gestión de residuos, y se redujo también el costo del servicio para los vecinos.

En 2016 el nuevo gobierno local elaboró un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el cual es fuertemente cuestionado por partidos de la oposición y organizaciones de recicladores que lograron introducir ajustes y demorar las nuevas licitaciones a través de acciones judiciales. Las pretendidas licitaciones, además de no respetar la obligación de incluir a los recicladores podrían poner en riesgo miles de puestos de trabajo de Aguas de Bogotá.

El servicio de aseo se cobra bimensualmente adherido al servicio de agua potable y alcantarillado. La Empresa de Agua y Alcantarillado de Bogotá –EAAB- distribuye el pago a las empresas privadas, a la empresa pública y a las organizaciones de recicladores reconocidas como prestadores del servicio.

El país tiene una profusa legislación referida al tema, la cual se complementa con numerosos fallos de la Corte Constitucional que han marcado de manera significativa al sector, en particular en lo que hace al reconocimiento de la población recicladora, generando un cambio de paradigma y un nuevo marco normativo a nivel nacional. El grado de organización y articulación de los recicladores fue determinante para lograr estos avances fundamentales y cambiar el imaginario social construido acerca del reciclador y revalorizar la función social de un colectivo que representa entre 13.000 y 22.000 personas. 30% de estos trabajadores están vinculados a las más de 60 organizaciones de recicladores que operan en la ciudad, de las cuales solo dos son reconocidas formalmente como prestadoras de servicios por la Alcaldía de Bogotá.

Por su parte, los trabajadores de la empresa pública de aseo están organizados sindicalmente dentro del **Sindicato de Trabajadores del Servicio Público de Colombia (SINTRASERPUCOL)**, fundado en 2014. En 2015 se firmó la Convención Colectiva entre la Empresa Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAB-ESB) y el Comité de Empresa de SINTRASERPUCOL, el cual, entre otras cosas: crea el Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) y garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores ante la eventualidad de una sustitución patronal, algo que, como se vio, podría llegar a ocurrir con la realización de las nuevas licitaciones de aseo.

---

<sup>4</sup> Intervenciones de representantes de SINTRASERPUCOL. Complementada con aportes de asociaciones de recicladores e informaciones brindadas con posterioridad al Encuentro por representantes de SINTRASERPUCOL.

## Brasilia - DF, Brasil<sup>5</sup>

La ciudad de Brasilia, o Distrito Federal – DF, es una de las ciudades más grandes del país. Especialmente construida en los años 50-60 para ser sede de la capital de la República, tiene algunas particularidades que la diferencian de otras grandes urbes brasileñas. A modo de ejemplo, el DF tiene un Índice de Desarrollo Humano (IDH) comparable al de los países ubicados en los primeros puestos de IDH, contrastando con el puesto 79 que ocupa el país en ese mismo índice (0,936 vs. 0,754)

Sin embargo, y a pesar de que el país tiene una amplia normativa en materia ambiental, y políticas nacionales y distritales para la gestión integral de residuos desde hace tiempo, recién en 2018 se inaugurará oficialmente el primer relleno sanitario de la ciudad. Hasta ahora, la disposición final de residuos se realizó en vertederos clandestinos y en el “Lixao do Jóquei”, uno de los mayores basurales a cielo abierto del mundo, el segundo más grande de América Latina.

La responsabilidad por la gestión de los residuos es del gobierno local (GDF) a través del Servicio de Limpieza Urbana (SLU), que terceriza los servicios de recolección convencional y selectiva, el transporte, clasificación y disposición final a través de empresas privadas o cooperativas de recuperadores de residuos (“catadores”).

Para el caso de las empresas tercerizadas, se trata de un total aproximado de 5.000 trabajadores, de los cuales alrededor de 50% están organizados en el **Sindicato de Limpieza Urbana del DF (SINDLURB)**. En general sus condiciones laborales son relativamente buenas en comparación con trabajadores públicos o privados de otros municipios brasileños. El Convenio Colectivo de la categoría asegura condiciones de salud y seguridad, continuidad laboral en el caso de cambio en las concesiones, mecanismos de diálogo y negociación, etc. Esto no quita la necesidad permanente de seguimiento para garantizar el cumplimiento del Convenio ante distintas situaciones que se han dado en los últimos años, como la amenaza de despidos masivos, acoso moral, atraso en el pago de salarios, etc.

Por otra parte, la inclusión de los trabajadores informales, un colectivo grande y bien organizado, es uno de los ejes de las políticas nacionales y distritales de gestión de residuos. Se estima que en Brasilia hay entre 3.000 y 4.000 “catadores”, de los cuales más de 2.500 están organizados en 34 cooperativas. El Plan Distrital de Gestión Integral de Residuos Sólidos (en construcción) prevé, entre otras cosas, la construcción y mejoramiento de centros de clasificación de residuos que serían operados por organizaciones de catadores que trabajan actualmente en el vertedero municipal, cuyo cierre definitivo está previsto para 2018. Este es motivo de gran preocupación para los catadores, ya que se aproxima el cierre y los centros de clasificación no están terminados. Además, la cantidad de puestos de trabajo que se generarían no alcanzarían a los más de 2.000 catadores que trabajan en el vertedero. La situación ha dado lugar recientemente a una acción judicial de la Defensoría Pública de la Unión contra el GDF.

Además del control permanente para defender sus puestos de trabajo y el respeto de las condiciones laborales por parte de las concesionarias, el SINDLURB señala como desafío el reconocimiento de la labor de los trabajadores del sector por parte no solo de las autoridades sino de la comunidad en su conjunto. En palabras de su Presidente: *“a pesar de lo llamativo de nuestros uniformes, la población solo nos ve cuando faltamos en la calle”*.

---

<sup>5</sup> Intervención de José Cláudio Oliveira, Director del Sindicato de Trabajadores de Limpieza Urbana de Brasilia (SINDLURB). Complementada con entrevista e informaciones brindadas con posterioridad al Encuentro.

## Buenaventura, Colombia<sup>6</sup>

La ciudad de Buenaventura, con algo más de 400.000 habitantes, es el municipio más poblado y de mayor extensión de la costa del Océano Pacífico.

En Buenaventura la gestión del servicio público de residuos está concesionada a la empresa BMA, perteneciente al Grupo IMPIA, de Cali. Previamente había estado en manos de la empresa Proactiva, vinculada a la multinacional Veolia. Actualmente la empresa tiene contratados alrededor de 130 trabajadores, de los cuales 102 (80% aproximadamente) están sindicalizados. Realizan labores de recolección, transporte, barrido, limpieza de espacios verdes y disposición final.

Estos trabajadores no tienen Convenio Colectivo, y las condiciones laborales son sumamente precarias: suspensiones frecuentes, falta de equipos de protección personal, no se respetan normas de salud y seguridad, no se paga horario nocturno ni horas extra, existen presiones para firmar páginas en blanco, entre muchas otras irregularidades. Una de las prácticas habituales es el despido de trabajadores y su recontractación a través de supuestas cooperativas de recolección.

Apenas hace un año (agosto de 2016) se creó el **Sindicato de Trabajadores de BMA (SINTRABMA)**, lo que motivó suspensiones y despidos de los dirigentes sindicales, incluyendo amenazas de muerte que han sido denunciadas por distintos medios: Ministerio de Trabajo, medios de prensa, fiscalía, justicia, etc.

Los dirigentes sindicales perseguidos no sienten respaldo de la justicia o el gobierno y consideran necesaria la intervención de organismos internacionales como la OIT para garantizar no solo el respeto de los derechos laborales sino también su integridad personal. Una situación delicada en un contexto como el colombiano donde es notorio el riesgo de vida que corren los dirigentes sindicales.

---

<sup>6</sup> Intervención de Luis Fernando Perea Obando, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de BMA (SINTRABMA). Complementada con informaciones brindadas con posterioridad al Encuentro.

## Ciudad de México, México<sup>7</sup>

Con 9 millones de habitantes -21 millones si se suma el Área Metropolitana- la Ciudad de México es una de las más grandes urbes del mundo. Según estimaciones, cada persona genera alrededor de 1,4kg de residuos por día, de lo cual una gran proporción es material orgánico o reciclable. Con el objetivo de reducir la cantidad de residuos que llegan a disposición final el gobierno de la Ciudad de México elaboró en 2016 el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. En julio de 2017 entró en vigor el programa “Basura cero”, que establece la obligatoriedad de la separación en origen y, a la par, la Asamblea Legislativa de la ciudad aprobó la Ley de Residuos Sólidos.

Por su parte, la recientemente aprobada Constitución, que entrará en vigor a partir de septiembre de 2018, hace mención específica a la gestión integral de los residuos y establece también que la gestión de residuos es una responsabilidad municipal, prohibiendo la concesión o privatización de los servicios públicos de recolección y tratamiento de residuos sólidos. Así mismo, la Constitución desarrolla ampliamente las cuestiones referidas a las relaciones laborales con los trabajadores de la ciudad, reconociendo derechos laborales, mecanismos de negociación colectiva, etc.

Actualmente, la gestión del servicio de residuos la realiza directamente la Ciudad de México con alrededor de 10.000 trabajadores, lo que representa aproximadamente a 9% del total de trabajadores municipales. Los mismos están organizados en el **Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX)**.

Los trabajadores/as del sector tienen Convenio Colectivo y participan en espacios de diálogo con los empleadores. La normativa laboral tiene en general un buen cumplimiento, y existen las comisiones mixtas de salud y seguridad laboral. El SUTGCDMX identifica a la falta de insumos (carros recolectores) y el pago de compensaciones como los problemas laborales más importantes o frecuentes en el sector.

---

<sup>7</sup> Intervenciones de Eladio Arellanes Varela y Lilian Leticia Porras Carreno, Secretario General de la sección 35 y Secretaria General de la sección 40 respectivamente, del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), complementada con informaciones brindadas con posterioridad al Encuentro.

## Chile<sup>8</sup>

En Chile hay una importante proporción de municipios que tienen sus servicios de recolección y disposición final de residuos privatizados, fundamentalmente con grandes trasnacionales. Para el caso de las grandes ciudades, aproximadamente el 50% tienen servicios de recolección municipalizados.

Una de las grandes dificultades es lo costoso del servicio. Por ejemplo, en Santiago de Chile, la capital del país, 30% del presupuesto municipal corresponde a la gestión de residuos.

Por otra parte, la nueva normativa ambiental exige construir nuevos rellenos sanitarios, pero en muchos casos se dificulta acceder a terrenos cercanos que reúnan las condiciones necesarias, lo que incrementa significativamente los costos de traslado. Por ejemplo, en Arica el costo del traslado de los residuos hasta el relleno sanitario equivale a 50% de lo que cobra la empresa de recolección.

En cuanto a las condiciones laborales, hay un contraste entre los trabajadores de empresas privadas y los municipales. Por ejemplo, si se compara el salario de unos y otros, los trabajadores privados reciben en media la tercera parte del salario de los municipales.

Actualmente los trabajadores de las empresas privadas están creando sindicato. Por su parte, la **Confederación Nacional de Trabajadores Municipales de Chile (ASEMUCH)** tiene entre sus demandas la re-municipalización del servicio de residuos, un desafío importante que se enfrenta a una alianza de Alcaldes que tratan de evitarlo. Una de las estrategias a las que apunta ASEMUCH para lograr el apoyo de la comunidad a su demanda es demostrar que la municipalización reduciría el costo del servicio.

---

<sup>8</sup> Intervención de Oscar Humberto Yañez Pol, Presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Municipales de Chile – ASEMUCH.



## Esquel-Trevelin, Argentina<sup>9</sup>

Esquel es una pequeña ciudad ubicada al pie de la Cordillera de los Andes, en la Patagonia Argentina. En 1995 el municipio inició un cambio profundo en su sistema de gestión de residuos, pasando de basurales a cielo abierto y quemas, a la gestión integral de residuos. A partir de la construcción de la planta de tratamiento y el relleno sanitario en 2009 se integraron en el proyecto GIRSU el vecino municipio de Trevelin y el Parque Nacional los Alerces.

El país cuenta con un sólido marco legal en materia ambiental y de gestión de residuos, con leyes, planes y políticas específicas, así como un Observatorio Nacional de GIRSU. De la misma forma, la provincia de Chubut –en la que se encuentran las localidades de Esquel y Trevelin- tiene su correspondiente política de gestión integral de residuos y otros sistemas de GIRSU en varios municipios, algunos de gestión pública y otros privados.

En el caso de Esquel-Trevelin, el servicio es de gestión municipal, realizado enteramente por trabajadores propios en todas las etapas: recolección selectiva, clasificación, tratamiento, comercialización y disposición final. El cobro del servicio se hace por la boleta de electricidad, algo que el **Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste (SOEME-ZO)** considera estratégico para garantizar el pago.

Los trabajadores del sector de residuos representan 20% del total de los puestos de trabajo municipales en Esquel y 10% en Trevelin, entre otros motivos porque la clasificación, tratamiento y disposición final ocurren en Esquel. Un 70% de los trabajadores municipales de Esquel y menos de 40% en Trevelin son parte de la planta permanente, el resto posee contratos precarios, uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente el SOEME-ZO.

Lo anterior repercute tanto en la sindicalización -60% en Esquel, 15% en Trevelin- como en las condiciones laborales. En general, éstas son buenas en la localidad de Esquel: los salarios son adecuados, se respeta la normativa de salud y seguridad, existen espacios de diálogo, se reconoce el carácter de trabajo de riesgo en el salario y en la duración de jornada laboral, etc. La situación es diferente en Trevelin, donde está amenazado incluso el derecho a la sindicalización. En el último año hubo serios conflictos entre trabajadores y autoridades locales por estos motivos.

Otro de los desafíos que señala el SOEME-ZO es el deterioro de maquinaria y herramientas, así como el faltante de mano obra. Estas situaciones están causando una sobrecarga y extensión de la jornada laboral, lo que aumenta los riesgos derivados del trabajo.

Un hecho importante a destacar es la valorización de los trabajadores del sector, cuyo papel se destaca en los materiales institucionales y comunicaciones oficiales. Desde el inicio, las políticas de gestión de residuos en Esquel integraron tanto la participación e involucramiento de la comunidad como de los trabajadores, entendiéndolos como actores protagónicos para lograr el buen funcionamiento de la gestión integral de residuos.

---

<sup>9</sup> Intervención de Jorge Luis Antipán, Antonio Osorio y Ángel Ramírez, representantes del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste (SOEME-ZO), complementada con entrevista e informaciones brindadas con posterioridad al Encuentro.



## Guatemala, Empresa Municipal de Agua<sup>10</sup>

En la ciudad de Guatemala, la gestión del servicio de agua y saneamiento la realiza el propio municipio a través de la Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala -EMPAGUA. Tiene a su cargo la planificación, diseño, ejecución y supervisión de las obras de construcción, mejoramiento, ampliación, reconstrucción y mantenimiento del servicio de agua potable y saneamiento en la Ciudad de Guatemala y sus áreas de influencia

La empresa cuenta con unos 2.000 trabajadores, de los cuales aproximadamente 50% están afiliados al **Sindicato: Sindicato de Trabajadores de la Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala (SITRAGUA)**. De ellos, 20 trabajadores (dos mujeres y 18 hombres) trabajan en la recolección de residuos y limpieza de espacios verdes, pero hay también muchas otras áreas donde se generan residuos como resultado de las tareas propias de la gestión del agua y saneamiento.

SITRAGUA tiene una muy activa política de reciclaje y reutilización de estos residuos. Parte de los materiales recuperados o reciclados se utilizan para mejorar las propias instalaciones del sindicato: armado de viveros a partir de materiales plásticos y envases PET, construcción de muros de contención utilizando neumáticos y restos de mampostería, etc. Otra parte de los materiales reciclables se comercializa para obtener fondos que se destinan a distinto tipo de ayudas solidarias a los trabajadores.

El sindicato promueve también actividades de sensibilización de la comunidad, por ejemplo, a través de jornadas de limpieza de espacios públicos involucrando a jóvenes y adolescentes.

En general, el sector goza de buenas condiciones laborales: cuentan con Convenio Colectivo, espacios de diálogo, comisiones mixtas, etc. Actualmente, la empresa está en un proceso de reorganización y existe la amenaza de pérdida de algunos puestos de trabajo.

---

<sup>10</sup> Intervención de Miguel Ángel Cos, Secretario de Finanzas, Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Agua de Guatemala (SITRAGUA), complementado con informaciones brindadas con posterioridad al Encuentro.

## La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia<sup>11</sup>

La ciudad de Nuestra Señora de La Paz es sede del gobierno nacional. Tiene una población de alrededor de 900.000 habitantes, lo que la convierte en la tercera más poblada del país después de Sucre y El Alto.

En 2015, el parlamento boliviano aprobó una Ley de Gestión Integral de Residuos que reconoce el papel y la necesidad de integrar a los recuperadores de residuos en el sistema de gestión, aunque no hace mención a los trabajadores formales del sector.

En consonancia con esta legislación, la ciudad de La Paz está implementando la gestión integral de residuos, la disposición final se realiza en el relleno sanitario de Alpacoma, donde se están construyendo plantas de clasificación y tratamiento de distinto tipo de residuos. El servicio de aseo está concesionado a una empresa privada, y también operan cooperativas de recuperadores de residuos. El servicio se cobra con la boleta de luz, lo recauda la alcaldía y paga a la empresa.

En 2016 se firmó un nuevo contrato de aseo con una empresa privada al perder vigencia la concesión anterior. En dicha oportunidad la alcaldía descartó la creación de una empresa municipal de aseo por una cuestión de costos.

La **Federación Nacional de Trabajadores de Aseo Urbano de Bolivia** denuncia que hay vulneración de derechos laborales por parte de la empresa privada, un aspecto sobre el que ahora es más fácil actuar sindicalmente desde la fundación de la Federación, la que actualmente cuenta con 4.900 trabajadores afiliados, mil en La Paz.

---

<sup>11</sup> Intervención de María Choque Quenta de Blanco, Secretaria Ejecutiva, Federación Nacional de Trabajadores en Aseo Urbano de Bolivia

## Managua, Nicaragua<sup>12</sup>

Managua, la ciudad capital de Nicaragua, es la ciudad más poblada del país, con un millón y medio de habitantes. En los años recientes, la ciudad de Managua ha cerrado finalmente La Chureca, uno de los mayores vertederos a cielo abierto en la región, convirtiéndolo en un moderno relleno sanitario y promoviendo la inclusión de centenas de trabajadores informales que segregaban residuos en el lugar (“churequeros”).

La conversión de La Chureca ha incluido la construcción de una planta clasificadora (EMTIDES) con el objetivo de mejorar la separación de residuos y facilitar proveer condiciones de trabajo dignas a los recuperadores de residuos que trabajan allí. Además, el proyecto de reconversión (que contó con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional – AECID) incluyó la construcción de 250 viviendas para la población vecina que habitaba en condiciones de gran precariedad.

Durante los años neoliberales de los 90 hubo una destrucción de lo públicos que, entre otras cosas, avanzó en la privatización del sector de residuos en Managua, tercerizándolo con la empresa de origen italiano Hidroject. Sin embargo a los seis meses el servicio se volvió a municipalizar hasta la fecha. Cabe señalar que el gobierno actual de Nicaragua es contrario a la privatización de los servicios públicos, como los de aseo y gestión de residuos.

La municipalidad de Managua tiene una planta de 6.000 trabajadores, de los cuales aproximadamente 4.000 se encuentran afiliados a la **Federación de Trabajadores Municipales de Managua (FETRAMUM)**. Los trabajadores del sector de residuos (recolección, limpieza y planta de clasificación) representan un 16% del total, y tienen un nivel de sindicalización que supera el 80%. La proporción de mujeres va de 25% en las áreas de recolección y limpieza urbana, a 50% en la planta de clasificación.

El problema más frecuente que enfrentan los trabajadores del sector es la falta de condiciones de protección (higiene y seguridad ocupacional) entrega tardía de los medios de protección, y, en algunos casos, falta de pago de del “incentivo de contaminación”. Los trabajadores del sector de limpieza pública y recolección gozan de un convenio colectivo donde se considera todo lo que tiene que ver con salarios, horas extras, incentivos, medios de protección, mecanismos de diálogo, entre otros. En el caso de la planta EMTRIDES se está trabajando un ante proyecto de convección colectiva.

---

<sup>12</sup> Intervención de Edgard Antonio Miranda, representante de de Federación de Trabajadores Municipales (FESTRAMUM-UNE-FNT), complementada con informaciones brindadas con posterioridad al Encuentro.

## Medellín, Colombia<sup>13</sup>

Con 2,5 millones de habitantes, la ciudad de Medellín es la segunda más poblada del país. Se asienta en el Valle de Aburra, en la Cordillera Central de los Andes. La ciudad tiene un sistema de gestión integral de residuos, y es la única ciudad de Colombia en la que el servicio lo presta una empresa totalmente municipal: Empresas Varias de Medellín (EMVARIAS).

El hecho de que la empresa sea totalmente pública es resultado de una lucha sindical de los años 90 a partir del despido de más de 200 trabajadores, lo que implicó 123 días de bloqueo del servicio. La acción sindical, con apoyo e intervención de la OIT, logró la recontractación de los trabajadores despedidos.

En total son unos 1.700 trabajadores en el área de aseo, de los cuales aproximadamente 10% tienen estabilidad laboral en la empresa y un Convenio Colectivo que garantiza buenas condiciones laborales, siendo que el 90% son trabajadores tercerizados. El **Sindicato de Trabajadores de EMVARIAS (SINTRA-EMVARIAS)** está trabajando para lograr que estos trabajadores tercerizados tengan el mismo Convenio que los de EMVARIAS, lo cual requiere algunas modificaciones que se deberán ir dando de manera gradual.

Sin perjuicio de lo anterior, SINTRA-EMVARIAS controla permanentemente el respeto de las condiciones laborales no solo de los trabajadores de la empresa sino también de los tercerizados: medidas de protección para la salud y seguridad, equipamientos adecuados, respeto de vacaciones, salarios, etc.

---

<sup>13</sup> Intervención de Iván Vanegas, Presidente del Sindicato de Trabajadores de Empresas Varias de Medellín (SINTRA-EMVARIAS)

## Quito, Ecuador<sup>14</sup>

El Distrito Metropolitano de Quito –DMQ- cuenta con alrededor de 2,6 millones de habitantes que generan cada día cerca de 2000 toneladas de residuos. Tanto la recolección -95% de cobertura- como el procesamiento y disposición final son gestionados por empresas públicas – EMASEO y EMGIRS, en proceso de fusión.

En Ecuador, la política de gestión integral de residuos sólidos –GIRS- se define en la Constitución Nacional en su reforma de 2008. En virtud de ello, desde 2010 el DMQ tiene su propia política de GIRS que, entre otras cosas, incorpora a los recicladores o recuperadores de residuos al sistema bajo la figura de “Gestor Ambiental”.

Prestan el servicio alrededor de 1.700 trabajadores municipales (1339 en EMASEO y 287 en EMGIRS) y unos 600 Gestores Ambientales repartidos entre la recolección selectiva y plantas de procesamiento y transferencia. Se estima que se recupera entre 10 y 20% de los residuos, lo que representa un importante valor económico y ha mejorado en forma significativa los ingresos de los “minadores” o recuperadores callejeros de residuos incluidos en el sistema, aunque no debe perderse de vista que se calcula que hay más de mil “minadores” trabajando en las calles de Quito sin reconocimiento del municipio. Estos trabajadores prestan un importante servicio a la ciudad, pero se encuentran en una situación de gran desprotección.

Uno de los aspectos más destacable de la política de GIRS del DMQ es precisamente el reconocimiento y valorización de los trabajadores del sector, tanto formales como informales. Pero hay también varios desafíos, como la posible pérdida de puestos de trabajo por la mecanización, y la vulnerabilidad por el fin del Convenio Colectivo en la administración pública. Esto último es denunciado por organizaciones ecuatorianas e internacionales, como la **ISP**, motivando incluso pronunciamientos de la OIT.

Es importante considerar el peso que los trabajadores del sector de residuos tienen sobre la planta municipal (28%) y su alto nivel de sindicalización (mayor a 70%). Además, la **Federación de Empleados Municipales y provinciales (FETMyP)** afilia también a alrededor de 60% de los Gestores Ambientales del DMQ, apoyando y articulando con este colectivo permanentemente. Esto da a la organización una importante representatividad y legitimidad de negociación frente a la administración.

Las organizaciones sindicales del sector denuncian, además, que en los últimos años hubo un deterioro del equipamiento, posible desvío de fondos, y exclusión de representantes de los trabajadores en el Directorio de las Empresas Públicas. Aunque muchas de estas cuestiones obedecen a cambios en normativa nacional, la organización sindical ve en este tipo de maniobras un intento de dismantelar las empresas públicas, lo que podría llegar a ser un peligroso paso previo que justifique la privatización del servicio a futuro.

Por ello, sumado a la lucha por mejoras laborales, incorporan en sus programas de acción sindical la defensa de la calidad del servicio público y la garantía de su financiamiento, elementos clave para sostener la gestión pública del mismo. Además, trabaja de forma permanente en la comunicación con la comunidad para explicar y sensibilizar sobre la situación a fin de lograr el apoyo y compromiso con la defensa del servicio público bajo gestión municipal.

---

<sup>14</sup> Intervención de Wilson Álvarez Bedón, Presidente de la Federación de Trabajadores Municipales y Provinciales de Ecuador (FETMyP), complementada con entrevista e informaciones brindadas con posterioridad al Encuentro.